

No. 28723

**SPAIN
and
URUGUAY**

Convention on conflicts of laws concerning maintenance obligations towards children and the recognition and enforcement of judicial decisions and court settlements relating to maintenance obligations. Signed at Montevideo on 4 November 1987

Authentic text: Spanish.

Registered by Spain on 16 March 1992.

**ESPAGNE
et
URUGUAY**

Convention relative aux conflits de droit en matière d'obligations alimentaires au bénéfice de mineurs et concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires en matière d'obligations alimentaires. Signé à Montevideo le 4 novembre 1987

Texte authentique : espagnol.

Enregistré par l'Espagne le 16 mars 1992.

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY SOBRE CONFLICTOS DE LEYES
EN MATERIA DE ALIMENTOS PARA MENORES Y RECONOCI-
MIENTO Y EJECUCIÓN DE DECISIONES Y TRANSACCIONES
JUDICIALES RELATIVAS A ALIMENTOS

El Reino de España y la República Oriental del Uruguay,

CONSCIENTES, de los profundos vínculos históricos que unen
a ambas Naciones,

DESEANDO traducirlos en instrumentos de cooperación jurí-
dica

HAN DECIDIDO concluir un Convenio sobre conflictos de le-
yes en materia de alimentos para menores y reconocimiento
y ejecución de decisiones judiciales relativas a alimentos
y a tal efecto han convenido lo siguiente:

T I T U L O I

Del ámbito y ley aplicable

Artículo 1o.

1. Cuando un menor tuviere su residencia habitual en el territorio de una de las Partes y el obligado a prestar alimentos residiere habitualmente o tuviere bienes o ingresos en el territorio de la otra Parte, la ley aplicable, en caso de conflicto, se determinará de acuerdo con el presente Convenio.

2. A los efectos de este Convenio, por el término menor se entiende aquella persona que sea calificada como tal por la ley de su residencia habitual.

Artículo 2o.

La ley aplicable, a elección del acreedor, es la de su residencia habitual o la de la residencia habitual del deudor, en uno de los Estados Partes o la ley del Estado Parte donde el deudor tuviera bienes o ingresos.

Artículo 3o.

1. Las normas de este Título sólo regulan los conflictos de leyes en materia de alimentos para menores.

2. Las decisiones adoptadas en aplicación de este Convenio no prejuzgan acerca de las relaciones de filiación y de familia entre el menor y el deudor de alimentos, aunque pueden servir como elemento probatorio, en cuanto fuere pertinente.

Artículo 4o.

En caso de cambio de la residencia habitual del menor, la ley del Estado de la nueva residencia es aplicable, a partir del momento en que se efectuase el cambio.

Artículo 5o.

La ley aplicable al derecho alimentario regula también:

- a) el monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo;
- b) la determinación de quiénes pueden ejercer la acción alimentaria en nombre y representación del menor;
- c) quiénes son las personas y entidades obligadas a prestar las obligaciones alimentarias.

Artículo 6o.

No será aplicable la ley designada por este Convenio, cuando su aplicación fuese manifiestamente incompatible con el orden público del Estado en el que se ejercitase la acción de alimentos.

T I T U L O I I

De la jurisdicción competente

Artículo 7o.

Serán Tribunales competentes para conocer de la acción de alimentos:

- a) los del Estado Parte de la residencia habitual del menor;

b) los del Estado Parte de la residencia habitual del deudor;

c) los del Estado Parte donde el deudor tuviere bienes o ingresos.

Los mismos Tribunales que hubieren conocido de la acción de fijación de alimentos serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción, así como para la adopción de medidas aseguratorias. Lo serán en la acción de aumento de los alimentos, cualquiera de los Tribunales precitados.

Artículo 8o.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, también serán competentes para asignar alimentos provisionales a los menores, los jueces que conozcan en los juicios de divorcio, separación de cuerpos e investigación de paternidad, cuando ello fuere impuesto por la respectiva ley aplicable.

T I T U L O I I I

De la Cooperación Jurídica

Artículo 9o.

Todo lo concerniente al libramiento y tramitación de las cartas rogatorias, así como el reconocimiento y ejecución de las decisiones y transacciones judiciales de fijación

de alimentos, quedarán sometidos a lo previsto en el Convenio de Cooperación Jurídica entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay.

T I T U L O I V

De las Instituciones

Artículo 10o.

1. El derecho de una institución de protección de menores pública o privada de interés público en un Estado Parte a obtener el reembolso de las prestaciones satisfechas por incumplimiento del deudor de alimentos, se regulará de acuerdo con la ley por la que se rige la institución.

2. Las instituciones referidas en el párrafo anterior podrán instar el reconocimiento y ejecución de la decisión, en representación del menor. A la solicitud se acompañarán los documentos acreditativos de la legitimación y de que se ha efectuado la prestación al menor.

T I T U L O V

Disposiciones Diversas

Artículo 11o.

Las Partes Contratantes se comprometen a facilitar las transferencias de fondos que procedieren por aplicación de este Convenio.

Artículo 12o.

Si el menor hubiere gozado del beneficio de justicia gratuita en el Estado donde hubiere ejercitado la acción, gozará también de este beneficio en el procedimiento de reconocimiento y ejecución.

Artículo 13o.

El reconocimiento y la ejecución procederán, cualquiera que sea la fecha de la decisión. Si ésta fuere anterior a la entrada en vigor del Convenio, la ejecución solo procederá en relación a los pagos no vencidos.

Artículo 14o.

1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos.

2. El presente Convenio tiene una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha notificación.

En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio.

HECHO en la ciudad de Montevideo a los cuatro días del mes de noviembre del año de mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares igualmente auténticos, e igualmente haciendo fe.

Por el Reino
de España:

[*Signed — Signé*]

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

Por la República Oriental
del Uruguay:

[*Signed — Signé*]

ENRIQUE IGLESIAS
Ministro de Relaciones Exteriores

[TRANSLATION — TRADUCTION]

CONVENTION¹ BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE
EASTERN REPUBLIC OF URUGUAY ON CONFLICTS OF
LAWS CONCERNING MAINTENANCE OBLIGATIONS TO-
WARDS CHILDREN AND THE RECOGNITION AND ENFORCE-
MENT OF JUDICIAL DECISIONS AND COURT SETTLEMENTS
RELATING TO MAINTENANCE OBLIGATIONS

The Kingdom of Spain and the Eastern Republic of Uruguay,
Being aware of the strong historic ties between their two nations,
Desiring to express them in instruments of juridical cooperation,

Have decided to conclude a Convention on conflicts of laws concern-
ing maintenance obligations towards children and the recognition and enforcement of judi-
cial decisions relating to maintenance obligations, and to that end have agreed as
follows:

PART I

SCOPE OF THE APPLICABLE LAW

Article 1

1. Where a child has his habitual residence in the territory of one of the Parties and the person liable for maintenance habitually resides or has assets or income in the territory of the other Party, the applicable law, in the event of a conflict, shall be determined in accordance with this Convention.

2. For the purposes of this Convention, the term “child” shall denote any person described as such by the law of his habitual residence.

Article 2

The applicable law, at the choice of the person entitled to maintenance, is the law of his habitual place of residence or that of the habitual place of residence of the person liable for maintenance, in one of the States Parties, or the law of the State Party where the person liable for maintenance has assets or income.

Article 3

1. The provisions of this Part shall regulate conflicts of laws only with regard to maintenance obligations towards children.

2. Decisions taken in application of this Convention shall not prejudice ties of direct descent and family between the child and the person liable for maintenance, although they may serve as evidence to the extent that they are relevant.

¹ Came into force on 29 February 1992, i.e., the last day of the month following the month of the exchange of the instruments of ratification, which took place at Madrid on 16 January 1992, in accordance with article 14 (1).

Article 4

In the case of a change in the habitual residence of the child, the law of the State of the new residence shall be applicable from the time when the change occurs.

Article 5

The law applicable to maintenance obligations shall also regulate:

- (a) The sum payable as maintenance and the terms and conditions for enforcement;
- (b) The determination of the persons who may bring a maintenance action on behalf of, and as representatives of, the child;
- (c) The persons and entities that are obliged to satisfy maintenance obligations.

Article 6

The law referred to in this Convention shall not be applicable where its application is manifestly incompatible with the public policy of the State in which the maintenance action is brought.

PART II

COMPETENT JURISDICTION

Article 7

The courts competent to assume jurisdiction in the maintenance action shall be:

- (a) Those of the State Party of the habitual residence of the child;
- (b) Those of the State Party of the habitual residence of the person liable for maintenance;
- (c) Those of the State Party where the person liable for maintenance has assets or income.

The same courts which assumed jurisdiction in an action to assess maintenance shall be competent to hear actions for termination and reduction of maintenance, and for the adoption of enforcement measures. Any of the above-mentioned courts shall be competent in an action to increase maintenance.

Article 8

Without prejudice to the provisions of the preceding article, judges who hear actions for divorce or judicial separation, or paternity suits, shall also be competent to award provisional maintenance to children, where this is imposed by the applicable law.

PART III

JURIDICAL COOPERATION

Article 9

All matters relating to the issuance and processing of letters rogatory, or the recognition and enforcement of judicial decisions and court settlements for the determination of maintenance payments, shall be subject to the provisions of the Juridical Cooperation Agreement between the Kingdom of Spain and the Eastern Republic of Uruguay.

PART IV

INSTITUTIONS

Article 10

1. The right of a public or private institution for the protection of children in a State Party to obtain reimbursement of payments made on account of the default of the person liable for maintenance shall be regulated in accordance with the law governing the institution.

2. The institutions referred to in the preceding paragraph may make application for the recognition and enforcement of the decision, on behalf of the child. The application shall be accompanied by documents attesting the authorization and the fact that payment has been made to the child.

PART V

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 11

The Contracting Parties undertake to facilitate the transfer of such funds as are appropriate in compliance with this Convention.

Article 12

If the child has been granted free legal aid in the State in which he brought the action, he shall also have the benefit thereof in the proceedings for recognition and enforcement.

Article 13

Recognition and enforcement shall proceed, irrespective of the date of the decision. If the latter is earlier than the entry into force of the Convention, enforcement shall proceed only in relation to payments not yet due.

Article 14

1. This Convention shall be subject to ratification and shall enter into force on the last day of the month following the exchange of the relevant instruments.

2. This Convention is concluded for an unlimited period. Either of the Parties may denounce it by means of a written notification through the diplomatic channel. The denunciation shall have effect from the last day of the sixth month following service of such notification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their Governments, have signed this Convention.

DONE in the city of Montevideo on 4 November 1987, in two equally authentic copies.

For the Kingdom of Spain:

[Signed]

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Minister for Foreign Affairs

For the Eastern Republic
of Uruguay:

[Signed]

ENRIQUE IGLESIAS
Minister for Foreign Affairs

[TRADUCTION — TRANSLATION]

CONVENTION¹ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY RELATIVE AUX CONFLITS DE DROIT EN MATIÈRE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES AU BÉNÉFICE DE MINEURS ET CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay,
Conscients des liens historiques profonds qui unissent les deux pays,
Désireux de les traduire par des instruments de coopération juridique,

Résolus à conclure une Convention relative aux conflits de droit en matière d'obligations alimentaires au bénéfice de mineurs et concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires en matière d'obligations alimentaires, sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

DU FOR ET DU DROIT APPLICABLE

Article premier

1. Lorsqu'un mineur a sa résidence habituelle sur le territoire de l'une des Parties et que le débiteur d'aliments réside habituellement sur le territoire de l'autre Partie, y possède des biens ou y reçoit des revenus, le droit applicable est déterminé, en cas de conflit, comme en dispose la présente Convention.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par « mineur » toute personne ainsi qualifiée par le droit en vigueur au lieu de sa résidence habituelle.

Article 2

Le droit applicable est, au choix du créancier, soit celui en vigueur au lieu de sa résidence habituelle ou au lieu de la résidence habituelle du débiteur dans l'un des Etats Parties, soit celui de l'Etat Partie où le débiteur possède des biens ou reçoit des revenus.

Article 3

1. Les dispositions du présent titre régissent uniquement les conflits de droit en matière d'aliments au bénéfice de mineurs.

2. Les décisions adoptées en application de la présente Convention ne préjugent pas des rapports de filiation et de parenté entre le mineur et le débiteur d'ali-

¹ Entré en vigueur le 29 février 1992, soit le dernier jour du mois ayant suivi le mois de l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Madrid le 16 janvier 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 14.

ments, bien que ces rapports puissent, le cas échéant, être pris en compte comme éléments probants.

Article 4

Si le mineur déplace sa résidence habituelle, le droit de l'Etat où se trouve sa nouvelle résidence devient applicable à partir du changement de résidence.

Article 5

Le droit applicable en matière d'aliments régit aussi :

a) Le montant de l'obligation alimentaire, ainsi que les délais et conditions dans lesquels elle déploie ses effets;

b) La détermination des personnes subrogées dans les droits du mineur à engager une action en aliments;

c) La détermination des personnes physiques et morales redevables des obligations alimentaires.

Article 6

Le droit désigné aux termes de la présente Convention n'est pas applicable lorsque son application serait manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat où est exercée l'action en aliments.

TITRE II

DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE

ARTICLE 7

Sont compétentes pour connaître les actions en aliments :

a) Les juridictions de l'Etat Partie où le mineur a sa résidence habituelle;

b) Les juridictions de l'Etat Partie où le débiteur d'aliments a sa résidence habituelle;

c) Les juridictions de l'Etat Partie où le débiteur d'aliments possède des biens ou reçoit des revenus.

La juridiction qui a connu l'action tendant à déterminer le montant des aliments est aussi compétente pour connaître les actions tendant à cesser ou à réduire le paiement des aliments, ainsi qu'à arrêter des mesures conservatoires. Chacune des juridictions susmentionnées est compétente pour connaître une action tendant à accroître le montant des aliments.

Article 8

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, les juridictions qui connaissent les requêtes en divorce, en séparation de corps et en reconnaissance de paternité ont compétence pour accorder à titre provisionnel des aliments à un mineur lorsque la loi applicable l'exige.

TITRE III

DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

Article 9

Toutes les questions relatives à la délivrance et à l'exécution des commissions rogatoires ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et transactions judiciaires concernant la détermination du montant des aliments sont sujettes aux dispositions de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume d'Espagne et la République orientale de l'Uruguay.

TITRE IV

DES INSTITUTIONS

Article 10

1. Le droit de toute institution d'intérêt public pour la protection des mineurs dans un Etat Partie, publique ou privée, à obtenir le remboursement des prestations occasionnées par la demeure du débiteur d'aliments est déterminé conformément au droit qui régit ladite institution.

2. Les institutions mentionnées au paragraphe précédent peuvent demander la reconnaissance et l'exécution de la décision au nom du mineur. La demande doit être accompagnée de pièces attestant de la subrogation et des prestations fournies au mineur.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11

Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les virements de fonds découlant de l'application de la présente Convention.

Article 12

Si le mineur a droit à l'aide judiciaire dans l'Etat où l'action a été engagée, il est également admis à l'aide judiciaire pour la procédure de reconnaissance et d'exécution.

Article 13

La reconnaissance et l'exécution déploient tous leurs effets quelle que soit la date de la décision. Si la décision a été rendue avant l'entrée en vigueur de la présente Convention, l'exécution ne porte que sur les paiements non encore échus.

Article 14

1. La présente Convention est sujette à ratification; elle entrera en vigueur le dernier jour du mois suivant l'échange des instruments de ratification.

2. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite transmise par la voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet le dernier jour du sixième mois suivant la date de ladite notification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

FAIT à Montevideo le 4 novembre 1987 en deux exemplaires authentiques et faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

[Signé]

FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ
Ministre des affaires étrangères

Pour la République orientale
de l'Uruguay :

[Signé]

ENRIQUE IGLESIAS
Ministre des affaires étrangères
